

COMUNICACIÓN

QUINCE AÑOS DE PRIVATIZACIONES EN ESPAÑA

Autores: M0 Angeles Ortega Almón, M0 Angeles Sánchez Domínguez y M0 Teresa Sánchez Martínez.

Departamento de Economía Aplicada.

Facultad de CC. Económicas y Empresariales.

Universidad de Granada.

Palabras clave: *privatizaciones, empresa pública, competencia, eficiencia económica, España.*

Abstract:

A partir de 1985 se inicia en España un modesto proceso privatizador. Sin embargo, no será hasta 1994 cuando comienza a plantearse las privatizaciones como un instrumento de política industrial, con la elaboración de un *Plan para la Racionalización y Modernización del Sector Público Empresarial*, sumándose así a la corriente liberal privatizadora que se extiende desde Gran Bretaña por todo el mundo desde principios de los años ochenta, atendiendo a principios de búsqueda de la eficiencia y mejora de la competitividad. Tras ganar el Partido Popular las últimas elecciones de marzo de 1996, se aprueba por el Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996 el *Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado*, siendo uno de los ejes de actuación de éste la puesta en práctica de un proceso de privatizaciones, con carácter de globalidad. El proceso de privatizaciones se ha intensificado en los dos últimos años, reduciéndose notablemente el peso del sector público empresarial. En nuestra comunicación trataremos de analizar las distintas fases por las que han discurrido las privatizaciones en España, las razones que las han justificado, haciendo balance de las empresas que se han privatizado hasta ahora, el método de privatización que se ha llevado a cabo y las nuevas privatizaciones en perspectiva, para dejar abierto a debate el futuro de la empresa pública en España.

1. Introducción

Una de las pautas de las políticas económicas aplicadas en Europa en la última década ha sido la de reducir la intervención del Estado sobre la economía. La política de privatizaciones ha sido el buque insignia de esta reducción del sector público, tras más de un cuarto de siglo de intervención pública creciente. El inicio de tal tendencia como fenómeno significativo hay que situarlo en Gran Bretaña, donde ha constituido la pieza emblemática desde que en 1979, Margaret Thatcher accediera al cargo de primer ministro.

No todos los programas de privatizaciones han sido llevados a cabo por gobiernos conservadores como el de Thatcher en Gran Bretaña o de Chirac en Francia, sino que ha habido importantes privatizaciones en Italia con un gobierno de coalición, en México con el Partido Revolucionario Institucional, o como en el caso de España, en la última década del Partido Socialista Obrero Español. El fenómeno privatizador ha trascendido fronteras nacionales, ideológicas y económicas. Se ha encontrado presente tanto en países occidentales como Alemania, Holanda, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Grecia o Irlanda, así como en países en vías de desarrollo, como Brasil, Venezuela, México, Turquía, Filipinas, Pakistán o India.

Entre los factores de fondo que han contribuido a potenciar esta corriente liberalizadora de la economía mundial, podemos apuntar, la necesidad de un entorno económico más liberalizado en consonancia con los retos de la competitividad internacional, las necesidades financieras crecientes de unas economías lastradas por el peso de los desequilibrios presupuestarios, y junto a éstos, la idea de que la gestión privada es más eficiente que la gestión pública, y que por tanto conviene reducir el peso económico del sector público.

2. El fenómeno privatizador en España entre 1985 y 1996

Las privatizaciones realizadas en España empezaron a cobrar relevancia a partir de 1985. Desde el gobierno socialista se evitaba utilizar el término Aprivatización¹, sustituyéndose por el de Aproceso de desinversión¹ del Estado en las empresas públicas, y al que numerosos autores

¹ A este respecto, puede verse el artículo publicado en el núm. 38 de Papeles de Economía por el Presidente del INI en el periodo 1986-1988 y ex Ministro de Industria y Energía, Claudio Aranzadi (1989), donde expone en qué consistió la Apolítica de desinversiones¹ del INI entre 1984 y 1987.

han denominado *Privatización silenciosa*². Aunque se puede afirmar, que este consistió más, en una reestructuración de la empresa pública, que en un plan privatizador aislado.

Las decisiones de desinversión no respondieron a imperativos de carácter político o ideológico, sino a criterios de racionalidad industrial y financiera². Con anterioridad a 1985, se había emprendido una política de gestión de la empresa pública según principios de mercado, y una búsqueda de eficiencia y racionalización del sector público empresarial.

La reducción de pérdidas del INI fue el objetivo principal, emprendiéndose para ello tres tipos de acciones:

- Reconversión y reducción gradual de empresas que no se consideraban viables con pérdidas crónicas, como en el caso de la minería del carbón, de la construcción naval y de empresas de defensa con pérdidas crónicas.

- Venta o privatización de empresas que no se consideraban viables en el marco del grupo

² Al analizar las privatizaciones de las empresas públicas españolas en este periodo, es preciso distinguir entre: las empresas que pasaron al sector público como consecuencia del proceso de saneamiento de bancos en crisis y de la expropiación de Rumasa, de las empresas integradas en algunos de los tres holdings públicos.

En el marco de la crisis bancaria del período 1977-1985, el Fondo de Garantía de Depósitos hubo de hacerse cargo de una serie de empresas vinculadas a los bancos con problemas de solvencia. Estas empresas al igual que las del grupo Rumasa, que pasaron a Patrimonio, fueron devueltas a la iniciativa privada, ya que nunca se tuvo el propósito de mantenerlas en el sector público. Las tibias medidas de privatización emprendidas se enmarcan dentro de una política más amplia de reconversión y racionalización de la cartera de participaciones públicas.

El caso del holding Rumasa es un caso muy especial dentro de los sistemas de privatización de empresas. Rumasa fue expropiada en 1983, siendo las razones esgrimidas por el Gobierno: proteger los intereses económicos de los accionistas minoritarios expropiados, de los trabajadores empleados en las empresas del Grupo (46.000 empleos), y de los acreedores de éstas. Para una mayor información sobre los rasgos fundamentales del proceso de reprivatización de Rumasa, puede consultarse: Moral (1989). En este trabajo, además, se analiza lo que era el Grupo Rumasa a la fecha de su expropiación y se cuantifica el coste para el Estado.

INI, pero sí fuera de él (Seat, por ejemplo).

- Creación de proyectos empresariales para su colocación posterior en el mercado, como el caso de Endesa, Inespal, Iberia, etcétera.

Las actuaciones emprendidas en materia de privatización desde 1985 hasta principios de la década de los noventa, fueron de dos tipos: a) venta directa de empresas públicas a empresas privadas; y b) colocación en Bolsa de paquetes minoritarios de acciones sin que el Sector Público perdiera el control de la gestión. El objetivo de esta última, era diversificar las fuentes de financiación y disciplinar la gestión mediante el control que puede ejercer el mercado de capitales (véase cuadro núm. 1).

La venta directa o de la mayoría del capital es el sistema que más se utilizó tanto para empresas que carecían de importancia estratégica por su pequeño tamaño o actividad (Viajes Marsans, SKF, Textil Tarazona, etcétera), como para grandes empresas, en las que la privatización tiene sentido cuando el nuevo accionista puede generar un mayor valor para el negocio que el sector público por razones tecnológicas, comerciales, de aprovechamiento de economías de escala y sinergias derivadas de una mayor cooperación industrial entre diferentes empresas. Este es el caso por ejemplo de Seat, Enasa³ o Maquinista Terrestre y Marítima (MTM).

En el caso de las empresas de mayor tamaño, una parte significativa de las ventas se hicieron a grupos extranjeros, como el caso de Seat a Volkswagen⁴, Enasa a Fíat, Telesincro a Bull, MTM y Ateinsa a Alsthon, Secoinsa a Fujitsu, Intelhorce a Orefici, etcétera. Mientras que en el caso de las empresas de menor tamaño fueron vendidas principalmente a inversores nacionales (Viajes Marsans, Gossypium, Hytasa, Macosa, Impiel, Alumasa, etcétera). La mayoría de ellas corresponden a empresas en crisis incorporadas al sector público por la retirada de la iniciativa privada en el periodo 1970-1982.

³ Tras varios años de pérdidas, en 1990 la división de vehículos industriales del grupo Fíat (IVECO) compró la empresa pública española Enasa, fabricante de los Pegaso, por 1.600 millones de pesetas.

⁴ La venta en 1986 de Seat (la única fábrica pública hasta entonces de automóviles en España) a Volkswagen fue quizás la primera privatización a gran escala en España o como algunos han llamado, un proceso de Amultinacionalización de una industria española desarrollada al amparo de la protección arancelaria y en pleno proceso de integración a la CEE, véase García Fernández (1990, pág. 237). El INI había tomado la participación mayoritaria de Seat en 1980, como una operación de salvamento.

Cuadro núm. 1. Empresas públicas privatizadas en España en el periodo 1985-1986 (1)

AÑO	EMPRESA	SECTOR (Y E. MATRIZ)	% VENDIDO	COMPRADOR
1985	Textil Tarazona	Textil	69,6	Entrecanales/Cima
	Ingenasa	Inmun./genética (Enisa)	67,6	ERT
			(51 en 1985 14,2 en 1986 2,4 en 1989)	
	Igfisa	Alimentación (Endiasa)	100	Pleamar
	Cesquisa	Química (Enisa)	45,4	Cepsa
	Secoinsa	Electrónica	69,1	Fujitsu*/CTNE
	SKF Española	Rodamientos	98,8	Aktiebogalet SKF*
	Marsans	Turismo	100	Trapsatur
1986	Entursa	Turismo	100	Ciga/Hoteles lujo españ.
	Frigsa	Alimentación (Endiasa)	100	Saprogal*
	Gypisa	Alimentación (Endiasa)	100	Fri.g. Santana
	La Luz	Alimentación (Carcesa)	100	Prevert
	Insisa	Bienes de Equipo (BWE)	60	Acctas. Privados Insisa
	Remetal	Aluminio (Inespal)	66,6	Socios Fundadores Remetal
			(66,1 en 1986 0,5 en 1990)	
	Issa	Aluminio (Inespal)	100	Aluperfil
	Aluflet	Aluminio (Alúmina Esp.)	40	Acctas.privados Aluflet
	Motores MBD	Construcción naval (Motores Barreras/Sodiga)	60	Klockner Humboldt Deutz AG*
			(38,4 en 1986 21,6 en 1989)	
	Pamesa	Papel (Ence)	100	Torras Hostench
	Fovisa (3)	Siderurgia (Made)	100	Gekanor (GKN*/Acenor)
	Indugasa	Automoción (Seat)	50	GKN*
	Seat	Automoción	100	Wolkswagen AG*
			(75 en 1986 25 en 1990)	
	Telesincro	Electrónica (Inisel)	100	Bull*
			(40 en 1986 33,9 en 1988 26,1 en 1994)	
	Gesa	Gas /Electricidad (Endesa)	39	(OPV)
1987	Dessa	C. Naval (Bazan/Astano)	80	Forestal del Atlántico
	Evatsa	Aluminio (Inespal/Sodiga)	100	Cebal
	Litofan	Aluminio (Inespal)	100	Baumgartner Ibérica*

Alumalsa	Aluminio (Inespal)	44	Montupet*
Purolator	Autom.(INI/CASA (4))	97,4	Knecht Filterwerke*
Victorio	Automoción	33,3	Eisenwert Bruhl*
Luzuriaga	Alimentación (Endiasa)	50	Saudisa (Promodes*)/BBV
Diasa	Alimentación (Endiasa)	51	Sugemesa (Agrolimen)
Miel Española	Alimentación (Lc.		Queserías Miraflores
Miraflores	Castellana)		

Cuadro núm. 1. Empresas públicas privatizadas en España en el periodo 1985-1996(1) (continuación)

AÑO	EMPRESA	SECTOR (Y E. MATRIZ)	% VENDIDO	COMPRADOR
1988	Endesa	Electricidad	29,2 (20,4 en 1988 8,7 en 1994)	(OPV)
	Ence	Papel (INI; Teneo/ Cofivacasa)	53,8 (39,3 en 1988 14,5 en 1995 (5))	(OPV)
1989	Astican	Construcción naval	90,72	Italmar
	MTM	Bienes de equipo	100 (85 en 1989 15 en 1992)	GEC Alsthom*
	Ateinsa	Bienes de equipo	100 (85 en 1989 15 en 1992)	GEC Alsthom*
	Enfersa	Fertilizantes	100 (80 en 1989 20 en 1991)	Ercros
	Oesa	Alimentación (Endiasa)	100	Ferruzzi*
	Pesa	Electrónica (Inisel)	97,4	Amper
	Ancoal	Aluminio (Enisa)	75,2	Omnium Industrie*
1990	Adaro Indonesia	Ingeniería (Enadimsa)	80	Indonesia Coal*/Asmincco Bara, Utama/Tirtamas Majutamas*
1991	Enasa	Automoción	100 (60 en 1991 40 en 1993)	Iveco/Fiat*
	Gr.Emp.Alvárez	Artesanía Industrial	100 (90 en 1991 10 en 1992)	Pickman (Estudesa)
	TSD	Electrónica (Enosa)	100	Telepublicaciones
1992	Icuatro	Iniexport	90	Grupo Alegre
1993	Automoción	Automoción (Teneo)	100	Inversores Reo
	2000	Bienes Equipo(Teneo)	100	Grupo Navacel/Total Technical, Trade/Luis Tellería Usabiaga
	Fábrica S.Carlos		100	Alcan Detsschland

	Palco	Aluminio (Inespal)	(50 en 1993 50 en 1994)	
1994	C. Trasatlántica	Trnsp. Marítimo (Teneo)	100	Naviera Odiel/Marít.Valenc
	Artespaña	Artesanía (Teneo)	100	Medino S.L.
	ASDL	Aeronáutica (Ceselsa)	87,7	Quadrant Group*
	Sodiga	Sociedad de Desarrollo Ind	51,2	Xunta de Galicia
1995	Refinalsa	Aluminio (Inespal)	50	Remetal
	Sidenor	Siderurgia (AIE)	50 (6)	Digeco-Roda

Cuadro núm. 1. Empresas públicas privatizadas en España en el periodo 1985-1996 (1) (Continuación)

AÑO	EMPRESA	SECTOR (Y E. MATRIZ)	% VENDIDO	COMPRADOR
INH				
1989	Repsol	Petróleo/Gas	79 (26,4 en 1989 4,2 en 1989 2,9 en 1990 2,1 en 1992 9,8 en 1992 14,1 en 1993 19,5 en 1995 11 en 1996)	(OPV) BBV Pemex* Pemex* (Canje de Bonos) OPV-Institucional (OPV) (OPV)
1994	Enagás	Gas	91	Gas Natural
	Caísva	Gas (INH/c. Madrileña alum. Y calef. por Gas)	100	Gas Natural
D.G. Patrimonio del Estado				
1985	Gossypium	Textil	100	Textil Guadiana
	Intelhorce	(DGPE/intelhorce) Textil	100	Orefici*
1990	Hytasa	Textil	100	Textil Guadiana
	Imepiel	Calzado	100	DFG Grupo Cusi
	Dirsa	Distr. Tabacalera	75,06	Diasa
	Seb de la Fuente	Distrib. Dirsa	100	Cofidisa (BBV)
	Salinas Torrevieja	Sal	38,5	Solvay*
	Coifer	Aliment. (Tabacalera)	50	Alim. Natur. BBV
1991	Fridarago	Aliment. (Tabacalera)	100	Rústicas
	Coisa	Aliment. (Tabacalera)	100	Rústicas
1993	Argentaria	Banca	49,99 24,99 en V-1993 25 en IX-1993 25 en 1996	(OPV) (OPV) (OPV)
1994	RJR Alimentación	Aliment. (Tabacalera)	50	RJR Nabisco*
1995	Telefónica	Telecomunicaciones	10,7	(OPV)
	Lesá	Aliment. (Tabacalera)	100	Leyma/Iparlat

(1) Clasificadas según su dependencia funcional y fecha de su (primera) privatización. No se han incluido venta de participaciones que no hayan supuesto la pérdida de control para el Estado (salvo OPVs), ni ventas de activos. Los compradores extranjeros aparecen señalados con asterisco.

(2) El porcentaje vendido supone el total de la participación pública previa, salvo que se indique lo contrario.

(3) Fovisa volvió temporalmente al sector público, al comprar Acenor (100% ICO) su participación al grupo inglés GKN en 1991. Acenor se integró en Sidenor en 1993, y esta se privatizó en 1995. (4) INI 94,7 % CASA 2,7 %.

(5) En 1994 Teneo tenía una participación directa del 55,9 %, y otro 9,7 % a través de Cofivacasa (Infainvest, Teneo). La participación de Cofivacasa fue vendida íntegramente, y la Teneo se vio reducida en un 4,9 %.

(6) Sidenor es el resultado de la fusión en 1993 de Foarsa (100% INI) y Acenor (100% ICO), quedando participada al 50% por ambos grupos hasta su total privatización en 1995.

(7) No se han incluido las empresas procedentes del grupo Rumasa.

Fuente: Villalonga Morenés, B., Expansión, 24 de julio de 1996.

En estas privatizaciones no se siguió un plan sistemático, sino que se actuó casuísticamente, respondiendo a problemas concretos. Estas han sido, una más, entre las medidas que se han seguido para racionalizar y reestructurar el Sector Público, que un objetivo en sí mismo.

La primera privatización parcial masiva en España, fue el 20,3 por 100 del capital de Endesa del que era propietario el INI. Cuando se llevó a cabo en mayo de 1988, constituyó la mayor emisión de valores⁵ jamás realizada en España y la mayor colocación de acciones en Europa desde el derrumbamiento del mercado de valores en octubre de 1987. A la ampliación de la base accionarial hay que añadir el inicio de la cotización de la compañía en la Bolsa de Nueva York. Otra privatización parcial ese mismo año, fue la venta del 39,8 por 100 de Ence, colocándose 3,6 millones de acciones entre 26.153 accionistas.

Ya en 1986, Gas y Electricidad, S.A. (GESA), colocó en bolsa el 38 por 100 de su capital. Otra privatización parcial masiva y que también resultó un gran éxito fue la venta en 1989 de un 30 por 100 de Repsol, que ha ido vendiendo paquetes sucesivos, hasta su privatización total, que comentaremos más adelante.

El proceso no cabe ser calificado siempre como de privatización, pues hubo sectores en los que se dieron fusiones y absorciones dentro del propio sector público, como es el caso del sector de petróleo-gas⁶, aluminio⁷, alimentación⁸ o telecomunicaciones, informática y electrónica;

⁵ Se colocaron 53 millones de acciones entre más de 73.700 nuevos accionistas nacionales y extranjeros.

⁶ En 1986 se fusionaron bajo el nombre de Alcudia, las empresas petroquímicas Alcudia, Montoro, Paular y Calatrava que pertenecían a accionistas extranjeros y que fueron adquiridas por el Estado. En 1986 Empetrol absorbió a Petroliber e Hispanoil a Eniensa. En 1987 se fusionaron Alcudia, Empetrol, Hispanoil y Butano para formar Repsol con las divisiones de Repsol Exploración, Repsol Butano, Repsol Química y Repsol Petróleo.

o bien, empresas que se liquidaron como Potasas de Navarra o Soler Almirall.

Hasta bien entrada la década de los noventa, no ha habido una política global de privatizaciones, a pesar de las operaciones realizadas durante la década de los ochenta y principios de los noventa. Se han transferido al sector privado segmentos de los grandes grupos industriales públicos, por motivos de saneamiento o necesidades de viabilidad. Pero estas actuaciones han sido fruto de decisiones aisladas y no de una estrategia definida y coherente de privatizaciones. La grave crisis presupuestaria y el Programa de Convergencia provocaron una decisión global del Ministerio de Economía y Hacienda sobre el proceso privatizador.

Es a partir de 1994, cuando se empieza a plantear las privatizaciones como un instrumento de política industrial, con la elaboración de un *Plan para la Racionalización y Modernización del Sector Público Empresarial*, y en el que se trazan algunas orientaciones para dar entrada en el sector público a grupos industriales y financieros nacionales e internacionales. España se suma así a la corriente liberal privatizadora que se extiende por todo el mundo, atendiendo a principios de búsqueda de la eficiencia y mejora de la competitividad.

La globalización y liberalización de los mercados, los intercambios comerciales y financieros, la desregulación de los sectores económicos y la necesidad de las continuas mejoras tecnológicas justifican la puesta en marcha de un programa de privatizaciones. A esto hay que añadir el momento especialmente complicado para las finanzas públicas, con un déficit público en 1995 superior al 6 por 100 del PIB y un nivel de deuda pública que se acercaba al 65 por 100 del PIB, circunstancias que favorecen el recurso a la privatización como mecanismo generador de ingresos o limitador de gastos para el sector público.

⁷ En 1985 se produce la absorción de la Empresa Nacional de Aluminio (Endasa) y Aluminio de Galicia (Alugasa) por Inespal.

⁸ En 1988 se produce la absorción de Endiasa, Carcesa, Ifasa y Lesa por Tabacalera, controlada por Patrimonio del Estado.

En abril de 1995, se vendió el 15 por 100 del capital de Repsol, y en el nuevo programa⁹ de actuaciones previstas por el Ministerio de Economía, estaban incluidas entre otras: Transmediterránea, Ence, Sidenor, Tabacalera, Aldeasa, Paradores Nacionales, Corporación Siderúrgica Industrial, Aviaco, Construcciones Aeronáuticas, etc., y varias filiales participadas por los grandes grupos, como Telefónica Móviles y Santa Bárbara Blindados, por ejemplo¹⁰.

⁹ El calendario propuesto el 27 de abril de 1995 por el Ministerio de Economía consistía en vender: el 15 por 100 del capital público de Telefónica en 1995, el 10 por 100 en 1996 y el resto en 1998; el 15 por 100 de Argentaria antes de diciembre de 1996; la mayoría de Transmediterránea antes de diciembre de 1997 y de Aldeasa en 1996. Comín (1996, pág.356).

¹⁰ Véase Zafra, J.M., AEl Gobierno acelera las privatizaciones≡, El País Negocios, domingo 26 de marzo de 1995, pág. 2.

Los ingresos obtenidos con las privatizaciones en España entre 1985 y marzo de 1994 [Comín, (1996, pág.356)] ascendieron a un billón de pesetas. Sin embargo, entre 1984 y 1993, el coste acumulado de las empresas públicas con pérdidas dependientes del Estado ascendió a 22,9 billones de pesetas¹¹, lo que supuso un coste anual para el Estado equivalente al 4,5 por 100 del PIB.

Una de las principales preocupaciones respecto al debate privatizador, era la protección suficiente del interés público en la privatización de aquellas empresas en la que la participación estatal era necesaria, bien para mantener la seguridad nacional (sectores de bienes y servicios básicos), bien para evitar fallos de mercado y monopolios naturales justificando la regulación y la propiedad pública y asegurando así la cobertura del servicio a todos los clientes, o bien para mantener industrias clave del desarrollo del país, a fin de conservar los niveles de empleo y renta de determinados sectores y núcleos de población. Con este objetivo, además de desarrollarse fórmulas como la Aacción especial (golden share)¹² o la creación de Anúcleos duros¹³, el Gobierno mediante la Ley 5/1995, de 23 de Marzo¹³, estableció *el Régimen Jurídico de Enajenación de Participaciones Públicas en Determinadas Empresas*, que exige la autorización administrativa previa en determinados acuerdos y actos relacionados con las empresas públicas consideradas¹⁴, siempre que el grado de privatización de una empresa sea superior al 5 por 100

¹¹ Distribuidos de la siguiente forma: 7,34 billones en subvenciones; 6,45 billones en transferencias de capital; 4,84 billones en pérdidas, y 4,33 billones en ayudas públicas para estimular la producción industrial.

¹² Fue aplicado por el Gobierno Socialista en el caso de la privatización parcial de Repsol y recientemente en los procesos de privatización de Argentaria, Telefónica, Tabacalera o Endesa.

¹³ Su desarrollo reglamentario aparece publicado en el Real Decreto 1525/1995 del 15 de septiembre.

¹⁴ Esta regulación sería de aplicación a todas las empresas de naturaleza mercantil que en la fecha de entrada

del capital y tenga un capital público superior al 25 por 100, o siempre que el proceso de privatización se plantee de tal forma que la participación del Estado vaya a quedar por debajo del 15 por 100.

en vigor de la Ley (27 de marzo de 1995), contasen con una participación directa o indirecta del Estado superior al 25 por 100 del capital social, y siempre y cuando desarrollasen una actividad considerada de interés público o pertenezcan a un grupo que desarrolle este tipo de actividades, o estén exentas total o parcialmente de la libre competencia (artículo 90 del Tratado Constitutivo de la Unión Económica).

Tras ganar el Partido Popular las elecciones de marzo de 1996, se hace cargo del Ministerio de Industria y Energía Josep Piqué¹⁵. Los elementos distintivos de la nueva política industrial son el fomento de la competencia en todos los mercados y la privatización¹⁶ como eje fundamental de gestión de la empresa pública. En un paquete de medidas aprobadas en Consejo de Ministros el 28 de junio de 1996¹⁷, el nuevo gobierno elevó a programa político las actuaciones en materia de privatización, comprometiéndose a que la privatización fuera global y totalitaria. Global en el sentido de que abarcaría a todas las empresas susceptibles de venta, y totalitaria en el sentido de que afectaría a la totalidad de la participación estatal, cualquiera que fuera el montante de la misma¹⁸.

3. Las privatizaciones tras las elecciones generales de 1996

El proceso de privatizaciones se ha intensificado a partir de 1997, reduciéndose considerablemente el peso del sector público empresarial en la economía y afectando a las empresas públicas de mayor tamaño y rentabilidad (Telefónica, Repsol, Tabacalera o Endesa), entre otras. En sólo dos años de gobierno, se han vendido empresas públicas por valor de más de cuatro billones de pesetas, duplicándose los ingresos obtenidos en los diez años de privatizaciones del partido socialista¹⁹. España ocupó en 1997 el sexto lugar por ingresos de privatizaciones²⁰ entre los veintinueve países de la OCDE, de los que dos tercios correspondieron

¹⁵ En un artículo publicado en la Revista Economía Industrial, núm. 308, por el ministro Piqué (1997), se exponen los ejes prioritarios de la nueva política industrial iniciada por el Gobierno del Partido Popular. Esta está centrada fundamentalmente en tres ejes prioritarios: la mejora del entorno empresarial, consolidación de la competencia y actuaciones específicas de fortalecimiento de la competitividad industrial.

¹⁶ En una entrevista reciente al Ministro de Industria y Energía este afirmaba que «la liberalización es el objetivo y la privatización el instrumento». El País Negocios, 29 de marzo de 1998, pág. 7.

¹⁷ Consejo de Ministros por el que se aprobó el Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado, y al que hemos hecho referencia dentro de este mismo capítulo, en el epígrafe 3.1.3.

¹⁸ En numerosas declaraciones realizadas por el presidente de la SEPI, Pedro Ferreras, se ha puesto de manifiesto la intención por parte del Gobierno, para que en el año 2000 el sector público empresarial quede totalmente privatizado, a excepción de Hunosa. Véase por ejemplo, El País. Negocios, domingo 18 de enero y 17 de mayo de 1998, págs. 4.

¹⁹ Véase El País. Negocios, 17 de mayo de 1998, pág.1.

²⁰ Según los datos preliminares de un informe de la OCDE sobre privatizaciones, durante 1997, el conjunto de Estados ingresaron por privatizaciones 157 millones de dólares, un 70 por 100 más que el año anterior, de los que dos tercios correspondieron a países de la Unión Europea. España ingresó 5.988 millones de dólares, con un incremento sobre 1996 de un 123 por 100. El País. Negocios, 17 de mayo de 1998, pág. 3.

a países de la Unión Europea. Esto es un reflejo de la urgencia por completar algunos de los programas privatizadores antes de la llegada de la Unión Económica y Monetaria (UEM).

En la carrera hacia la UEM, los gobiernos europeos tienen un mayor incentivo para acelerar sus programas de privatizaciones. Aunque los ingresos por privatizaciones no pueden ser utilizados para el cálculo del déficit, sí se pueden utilizar para reducir la deuda²¹. A esto hay que añadir, que las privatizaciones evitan tener que incurrir en gastos destinados a financiar tanto las pérdidas de explotación de algunas empresas públicas como los programas de inversiones del conjunto del Sector Público empresarial.

La primera operación de privatización llevada a cabo por el nuevo Gobierno se inicia en octubre de 1996 con la desinversión a través de una OPV del 3,81 por 100 del capital. En el cuadro núm. 2, se recogen las empresas privatizadas a lo largo de 1997 y 1998, indicándose la participación pública que se privatiza, el montante de la operación y la fecha en la que se aprueba por el Consejo de Ministros. De igual modo, se puede observar el método de privatización que se ha llevado a cabo. Las fórmulas básicas de enajenación de activos de empresas públicas llevadas a cabo durante estos años, responden principalmente a dos modalidades:

a) La venta negociada de activos, en la que se transfiere la propiedad en el marco de conversaciones privadas, tras una oportuna preselección de los potenciales compradores, normalmente productores de la misma rama de actividad, bien en relación de competencia o de

²¹ Cuando el Estado posee directamente acciones de una empresa pública que se privatiza, el beneficio o pérdida que genere la operación no tiene incidencia sobre el déficit público en términos de contabilidad nacional. El importe de la privatización dará lugar a un cambio en los activos financieros del Estado, debiendo contabilizarse en su totalidad como una variación negativa de activos financieros (acciones), que producirá simultáneamente, una variación positiva del disponible, careciendo de efecto sobre el saldo de la cuenta de capital (capacidad o necesidad de financiación), con lo que la operación no altera el déficit público. El interés de dicha operación reside en la posibilidad de que los fondos obtenidos por la enajenación de un activo financiero se destinen a rebajar un pasivo financiero, en particular la amortización de la deuda pública para disminuir el saldo vivo de deuda en circulación. Al mismo tiempo si se destina el importe de las privatizaciones a amortizar deuda en circulación, disminuirán los intereses correspondientes a la deuda amortizada, lo que permitirá reducir el déficit público.

complementariedad, cerrándose la operación con aquel interesado que ofrezca mejores condiciones o garantías, a juicio de los responsables públicos.

b) O bien, la oferta pública de venta de acciones (OPV), en la que la oferta global típica acostumbra a dividirse en un tramo nacional y varios tramos internacionales, que se corresponden con diferentes regiones geográficas.

Cuadro núm.2 : Venta de Empresas Públicas 1997 y 1998.

Empresa	Propietario	Precio (M.Pta.)	Comprador	Fecha (*)
Telefónica	SEPPA (1)	630.000	OPV	20/12/1996
Minas Almagrera	SEPI (2)	443	N.Resources	17/1/1997
Sodiga (5%)	SEPI	-	Xunta Galicia	30/1/1997
Iongraf	SEPI	165	Directivos	7/3/1997
Repsol (10%)	SEPI	168.692	OPV	7/3/1997
Surgiclinic (50%)	SEPI	-	Hambros	7/3/1997
Sodical (51%)	SEPI	717	Dip. y Cajas	14/3/1997
Auxini (60%)	SEPI	5.950	OCP Const.	7/6/1997
Aldeasa (20%)	SEPPA	15.000	Tabacalera	15/6/1997
Retevisión (70%)	Fomento	181.003	Endesa-Stet	12/7/1997
Endesa (25,57%)	SEPI	695.462	OPV	24/7/1997
Inespal	SEPI	61.500	Alcoa	29/7/1997
CSI(Aceralia) (35%)	AIE (3)	129.200	Arbed	1/8/1997
Aldeasa (80%)	SEPPA	48.545	OPV	1/8/1997
Infoleasing	SEPI	3.100	La Caixa	12/9/1997
Elcano	SEPI	5.770	Navieras nac.	24/10/1997
Aceralia (52,8%)	SEPI	212.367	OPV	7/11/1997
Aceralia (10,8%)	SEPI	40.000	Aristrain	7/11/1997
Aceralia (0,6%)	SEPI	1.500	J.M.Aristrain	7/11/1997
Aceralia (1%)	SEPI	3.692	Gestamp	7/11/1997
Ferroprefil	SEPI	21	Directivos	14/11/1997
Sodicaman (51%)	SEPI	658	Dip. y Cajas	26/11/1997
Barreras	SEPI	750	G. Barreras	26/12/1997
Argentaria	SEPPA	325.000	OPV	16/1/1998
Tabacalera	SEPPA	310.000	OPV	13/4/1998**

(1)Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (Ministerio de Economía).(2) Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. (3) Agencia Industrial del Estado.

(*)Corresponde a la autorización de la venta por parte del Consejo de Ministros.

(**) Fecha en la que se pone a la venta a través de una OPV.

Fuente: Anuario El País 1997 (1998), Informe Anual SEPI 1996 (1998) y elaboración propia.

a) Entre la **venta negociada de activos** destaca:

- La sociedad onubense **Minas de Almagrera** (única empresa de la SEPI en el sector de concentrados metálicos no férricos y ácido sulfúrico) que se vende al grupo multinacional irlandés Navan Resources ya implantado en España.

- En 1995 se llegó a un acuerdo con la empresa OCP Construcciones, S.A., para la venta del 40 por 100 de la empresa pública **Auxini** (cuya área de negocio es la construcción), procediéndose en 1997 a su privatización total mediante la venta del 60 por 100 restante a la misma empresa, al haber sido seleccionada de nuevo del total de ofertas recibidas y tras el preceptivo informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones, y posterior aprobación por el Consejo de Ministros.

- En julio de 1997 el grupo encabezado por Endesa y la italiana Stet (de titularidad pública en un 44,74 por 100) ganan el concurso para la privatización del 60 por 100 de la empresa pública **Retevisión**, comprometiéndose a pagar al Tesoro 116.359 millones por el 60 por 100 de Retevisión y a desembolsar otros 64.644 millones para suscribir una ampliación de capital obligatoria, dándole finalmente al grupo el control del 70 por 100 de Retevisión. Según las manifestaciones²² del propio ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, la privatización total (30 por 100 restante) de la compañía, se acometerá en diciembre de 1998²³, mediante una salida directa a bolsa de las acciones o por la venta directa del paquete a nuevos socios.

- El 29 de julio de 1997 el Gobierno cerró los acuerdos para la venta del 35 por 100 del capital de la **Corporación Siderúrgica Integral** (CSI)- siendo la AIE la titular del 100 por 100 del capital social- al grupo luxemburgués Arbed. Esta operación no reportó ingreso alguno al Estado, ya que la entrada de Arbed fue llevado a cabo mediante una ampliación de capital por importe de 129.200 millones de pesetas, suscrito íntegramente por el grupo luxemburgués. El grupo resultante de la integración de ambas compañías se convierte en el primero de Europa y en el tercero del mundo. La CSI pasa a llamarse **Aceralia**.

- Con pocos días de diferencia, se había vendido al grupo multinacional estadounidense Alcoa (Aluminum Company of America), el 100 por 100 del capital de **Inespal** (Industria Española de Aluminio), que pertenecía prácticamente en su totalidad a la SEPI. Aunque el precio de venta fue 61.500 millones de pesetas, la SEPI ha tenido que cubrir pérdidas acumuladas, por

²² Véase El País, 12 de julio (pág.58) y 13 de julio (pág.47) de 1997.

²³ Fecha, según anunció el ministro, en la que se liberalizará plenamente el mercado de las telecomunicaciones, por lo que también es previsible que finalice el monopolio en la emisión de las señales de televisión que actualmente mantiene Retevisión. Arias Salgado precisó, que el carácter estratégico del sistema de satélites Hispasat en su actual configuración desaconsejan la privatización total de Retevisión antes de diciembre de 1998.

valor de más de 80.000 millones de pesetas.

- Otra venta directa, pero en este caso a empresas del sector nacionales, es la empresa de transporte marítimo **Elcano**, cuyo capital social estaba íntegramente en manos de la SEPI, y que es vendida a las navieras españolas: Soponata, Remolcanosa y Naviera Murieta.

b) Mediante **oferta pública de venta de acciones** (OPV):

- En diciembre de 1996 se aprueba en el Consejo de Ministros la venta de la totalidad de acciones que Patrimonio del Estado mantenía en **Telefónica** (20,9 por 100 del capital), aunque no se ponen a la venta hasta enero de 1997. Con la privatización total de Telefónica, España se coloca a la cabeza de las naciones europeas en las que el Gobierno deja a merced de inversores privados el futuro de la primera compañía del sector de las telecomunicaciones. Tan sólo el Reino Unido, donde el Gobierno de Margaret Thatcher inició el proceso de privatización de British Telecom en 1985, marcha por delante en lo que a privatización de compañías públicas de teléfonos se refiere.

- En este mismo año culmina la privatización total de **Repsol**, a través de una oferta pública de venta de acciones²⁴ del 10 por 100 del capital que aún permanecía en manos de la SEPI²⁵. Durante 1996, se había realizado otra OPV importante (11 por 100) en la el Estado ingresó más de 100.000 millones de pesetas. Las sucesivas ventas efectuadas hasta 1997 habían generado ingresos para el Estado de unos 700.000 millones de pesetas.

- En julio de 1997, se aprueba por el Consejo de Ministros²⁶, la mayor operación de privatización hasta la fecha, al autorizarse la privatización parcial de **Endesa** (hasta el 35 por 100)- perdiendo la SEPI la mayoría que hasta entonces poseía del capital social-, y que se completa en 1998 con su privatización total, tras ponerse en mayo a la venta el último paquete

²⁴ En esta última fase de privatización, la empresa ha dado un papel especial a sus 18.878 empleados y jubilados, para los que reservó el 15 por 100 total de las acciones que salió al mercado (4,5 millones de acciones, es decir el 1,5 por 100 del capital). El País, 8 de marzo de 1997.

²⁵ El 90 por 100 restante del capital de Repsol, está en manos de accionistas entre inversores institucionales y particulares, nacionales y extranjeros, siendo accionistas destacados el Banco de Vizcaya (con el 7 por 100), la petrolera mexicana Pemex (5 por 100) y La Caixa (5 por 100).

²⁶ Aunque se aprueba en Consejo de Ministros de 24/7/1997, la privatización de Endesa no se inicia hasta el 26 de septiembre de ese mismo año y culminado la operación a finales de octubre.

de acciones (33 por 100)²⁷.

- Patrimonio del Estado pone a la venta el 80 por 100 del capital de **Aldeasa**, sociedad que desarrolla una actividad netamente comercial, basada fundamentalmente en la explotación de las tiendas libres de impuestos en los aeropuertos.

²⁷ Esta última privatización parcial supone la mayor OPV de la historia económica de España, y en la que se esperan obtener unos ingresos, según las fuentes oficiales, cercanos a los 1,3 billones de pesetas.

- El Consejo de Ministros reunido el 7 de noviembre de 1997, autorizó a la SEPI a que vendiera su participación accionarial en **Aceralia** que ascendía al 52,8 por 100 (OPV), así como la compra del 1 por 100 por Gestamp (socio mayoritario de Gonvarri), y el 11,4 por 100 a la Corporación Aristráin²⁸.

Otros procesos de privatización culminados desde el inicio de 1998 son:

- La aprobación por el Consejo de Ministros de 16 de enero de 1998, de la venta del 29,2 por 100 del capital de **Argentaria**, lo que supone la salida definitiva del Estado del sistema financiero español. Desde su constitución en el año 1991, con la creación de la Corporación Bancaria de España, el grupo ha estado inmerso en un proceso de transición desde un modelo de banca pública, vehículo de apoyo a la instrumentación de la política económica, hacia un sistema empresarial, con una gestión basada en la búsqueda de rentabilidad y eficiencia en el desarrollo de la actividad.

- El 13 abril de 1998, se pone a la venta a través de otra OPV, el 52,4 por 100 del capital de **Tabacalera**, que estaba en manos de Patrimonio del Estado.

Teniendo en cuenta las privatizaciones y las reestructuraciones de empresas en estos dos últimos años, las principales empresas públicas que quedan están enmarcadas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, en Patrimonio del Estado, así como otros entes públicos y organismos autónomos no incluidos en los holdings estatales.

Las empresas públicas que aún componen la SEPI son: en el *sector de la energía*: Red Eléctrica y Enusa; *transporte aéreo*: Grupo Iberia; *aeroespacial*: Casa; *tecnología de la información*: Indra; *celulosa*: Ence; *sector de la minería*: Suria K , Potasa de Llobregat junto a la división minera de la antigua AIE (Presur, Hunosa, Figaredo); *división naval*: Astilleros Españoles y Astano, junto a otras empresas también de la desaparecida AIE (Santa Bárbara,

²⁸ Previamente se había firmado un acuerdo (20 de octubre de 1997), en el que se establecía la compra del 10,8 por 100 de Aceralia por Aristrain y por un importe de 40.000 millones de pesetas, y el 0,6 por 100 de Aceralia por parte del presidente del grupo, José María Aristráin, por valor de 1.500 millones de pesetas (El País, sábado 8 de noviembre de 1997).

Bazán, Productos Tubulares); *bienes de equipo, ingeniería y construcción*: B.W.E., Ensa, Initec, INI Mediambiente, Iniexport, T.G.I.; *servicios financieros*: Musini, Infoinvest, Sodian, Sodiar, Sodiex, INI Finance BV.

Entre las nuevas privatizaciones en perspectiva, se encuentran actualmente una serie de empresas en las que se está negociando con otros grupos su venta directa (Potasas de Llobregat y Suria K, Balcock & Wilcox, Musini, Santa Bárbara y Enatcar²⁹) y la privatización a través de una OPV, como en el caso del Grupo Iberia, Red Eléctrica o Indra. Así pues, en los planes sobre las nuevas privatizaciones en perspectiva van a predominar las operaciones de venta directa frente a las ofertas públicas de acciones.

La SEPI ha iniciado el proceso para la privatización de las compañías mineras de **Potasas de Llobregat y Suria K**, que controlan el 50 por 100 del mercado de potasas en España y el 25 por 100 del de Francia. La Sepi cuenta actualmente con seis ofertas, de las cuales tres corresponden a grupos nacionales (Aragonesas, Fertiberia y un grupo de antiguos directivos de la empresa Potasas de Llobregat y que cuentan con el apoyo financiero del Banco de Sabadell, el fondo de inversión británico Charterhouse y la sociedad de valores Riva y García), y otras tres de multinacionales (la canadiense Potash Corporation³⁰, la israelí Dead Sea Work y la sudafricana Minorco). El estado espera obtener por esta operación unos ingresos entre los 12.000 y 20.000 millones de pesetas aproximadamente. la SEPI ha manifestado que tendrá prioridad el comprador que garantice un proyecto industrial a largo plazo y el mantenimiento de los actuales puestos de

²⁹ Enatcar fue transferida desde el Ministerio de Fomento a la SEPI, valorándose en poco más de 12.500 millones de pesetas, cifra que se ha fijado tácitamente como punto de partida para su privatización. La SEPI actualmente está estudiando más de dos decenas de ofertas recibidas. La mayor parte de las ofertas valoran la empresa entre 15.000 y 20.000 millones de pesetas.

³⁰ Canadá representa más de la mitad de la producción mundial de potasas y el país que regula el precio de las potasas en el mundo.

trabajo.

Están avanzadas las conversaciones para la venta de **Babcock & Wilcox** con la noruega Kvarner y Duro Felguera; al igual que las de la empresa **Musini** con varias aseguradoras. También existen negociaciones para la privatización de la mayoría del capital de la empresa **Santa Bárbara Blindados**³¹, filial de Santa Bárbara, con el consorcio alemán Rheinmetall.

³¹ Esta filial de la Empresa Nacional Santa Bárbara, tiene adjudicado el *Programa Leopard* (325 carros por 318.000 millones de pesetas), por parte de la firma española Talgo.

También está previsto sacar acciones del **Grupo Iberia** a bolsa en los últimos meses de 1998 o en 1999. Como un primer paso a un cercano proceso de privatización, la SEPI está negociando actualmente una ampliación de capital del 10 por 100, en la que suscribirán capital como socios tecnológicos los gigantes de la aviación comercial, American Airlines y British Airways, con un 5 por 100 cada una de ellas³². Los planes de la SEPI son reservar otro 30 por 100 del capital de este grupo para inversores españoles (una especie de *núcleo duro*), un 6 por 100 para los trabajadores y el 55 por 100 restante sacarlo a Bolsa.

4. Conclusiones

Una de las pautas de las políticas económicas aplicadas en Europa en la última década ha sido la de reducir la intervención del Estado sobre la economía. Las políticas de privatizaciones han sido el buque insignia de esta reducción del sector público, tras más de un cuarto de siglo de intervención pública creciente. El fenómeno privatizador ha trascendido fronteras nacionales, ideológicas y económicas. Entre los factores de fondo que han contribuido a potenciar esta corriente, podemos apuntar la necesidad de un entorno económico más liberalizado en consonancia con los retos de la competitividad internacional, las necesidades financieras crecientes de unas economías lastradas por el peso de los desequilibrios presupuestarios, y junto a éstos, la idea de que la gestión privada es más eficiente que la gestión pública, y que por tanto conviene reducir el peso económico del sector público. El objetivo principal de la privatización debería ser el aumento de la eficiencia económica, no sólo como la clave para mejorar las actuaciones del sector público empresarial, si no que también es fuente de otras mejoras que frecuentemente se le atribuyen a la privatización, en particular, sus efectos presupuestarios favorables³³. En general

³² A esta ampliación de capital también acudirá la SEPI que inyectará 20.000 millones de pesetas en la empresa como cumplimiento del compromiso adquirido con los trabajadores del grupo. Véase Cebrián, B. A Iberia pide pista en Bolsa, El País. Negocios, 17 de mayo de 1998, pág.6.

³³ Como señala Vickers (1993, págs. 85-86): Ael argumento recaudatorio en favor de la privatización no es evidente, puesto que es necesaria una visión a largo plazo de los ingresos. Si la privatización provoca mejoras en la eficiencia, sus ventajas recaudatorias aumentan. Pero si existe una tendencia a la subvaloración del precio de

la competencia y la regulación son determinantes más decisivos de los resultados económicos que la titularidad en sí.

En el caso de España, el proceso de privatizaciones ha tenido dos fases muy diferenciadas.

Una primera etapa entre 1985 y 1994 en la que no se siguió un plan sistemático, si no que se actuó casuísticamente, respondiendo a problemas concretos, siendo las privatizaciones, una más, entre las medidas que se siguieron para racionalizar y reestructurar el sector público empresarial, que un objetivo en sí mismo. En la etapa socialista, las privatizaciones realizadas respondieron a la voluntad gubernamental de disminuir el peso del sector público en sectores de actividad no estratégicos regidos por criterios de mercado. Las privatizaciones más importantes se realizaron de forma parcial a través de operaciones públicas de ventas de acciones. Los ingresos obtenidos por éstas estuvieron en torno a los dos billones de pesetas. El modelo privatizador cambió tras las elecciones de 1996, intensificándose éste y reduciéndose considerablemente el peso del sector público empresarial en la economía, afectando a las empresas públicas de mayor tamaño y rentabilidad, y duplicándose los ingresos obtenidos con respecto a la etapa socialista. Tenemos que recordar que la deuda pública española estaba en torno a los 51 billones de pesetas a principios de 1997. Las privatizaciones, como ya hemos manifestado anteriormente, no son un instrumento importante para cumplir las exigencias de déficit de Maastricht, aunque por su influencia en la deuda y de forma indirecta, apoyan el ingreso de España en la Unión Monetaria. Los ingresos por privatizaciones en esta legislatura hasta finales de 1998, han estado en torno a los 2 billones de pesetas, así pues, la aportación de las privatizaciones al cumplimiento de los objetivos de Maastricht no resulta excesiva, aunque es un instrumento más. Muchos de los demás beneficios atribuidos a las privatizaciones (reducción del poder de los sindicatos, fomento del capitalismo popular, redistribución de la renta, etcétera) pueden probablemente conseguirse mediante otros instrumentos como la reforma sindical o incentivos fiscales al ahorro, entre otros.

Las privatizaciones de las grandes empresas públicas españolas no hubieran conseguido el éxito alcanzado sin la fuente de financiación que ha supuesto el ahorro de la sociedad favorecido por el extraordinario periodo que ha atravesado el mercado de capitales y la fuerte

venta de las acciones, las consideraciones recaudatorias pueden ser contrarias a la privatización.

reducción de los tipos de interés en los últimos años. En teoría, la creación de una amplia base accionarial directamente interesada en el proceso, proporciona una poderosa herramienta de freno a futuras tendencias nacionalizadoras. Sólo la baja de los mercados financieros y una previsible recesión económica desanimaría a los inversores y convertiría a lo que hoy se considera capitalismo popular en una forma bastante impopular de perder dinero.

Referencias bibliográficas:

- ARANZADI, C. (1989): "La política de desinversiones en el INI", *Papeles de Economía Española*, núm. 38, págs. 258-261.
- COMÍN COMÍN, F. (1996): *Historia de la Hacienda Pública, II. España (1808-1995)*. Nuevos instrumentos universitarios. Crítica. Grijalbo Mondadori. Barcelona.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, J. (1990): "Política empresarial pública 1973-1988", en Martín Aceña, P. y Comín, F. (Edit), *Empresa Pública e industrialización en España*. Alianza Editorial, págs. 217-250.
- MORAL, J. (1989): "El proceso de reprivatización del grupo Rumasa", *Papeles de Economía Española*, núm. 38, págs. 293-319.
- OPORTO DEL OLMO, A. (1997): "Comentarios acerca de la evolución de la industria y la política industrial de 1986 a 1996", *Información Comercial Española*, núm. 766, págs. 89-102.
- PIQUÉ I CAMPS, J. (1996): "Las políticas de adaptación de las estructuras industriales; pasado y presente", *Economía Industrial*, núm. 308, págs. 19-22.
- SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (1998) : Informe Anual 1996.
- VICKERS, J. (1993): "El programa de privatizaciones británico: una evaluación económica", *Moneda y Crédito*, núm. 196, págs. 79-122.

